



Artículos

Túnez y la implementación de políticas de ajuste pro FMI: masivas resistencias sociales en un convulsionado año político.

Patricio Claus¹ y Juan Ignacio Salaberry²

No es una novedad que el Fondo Monetario Internacional, como uno de los principales organismos multilaterales de crédito del mundo, proponga a través de las denominadas Consultas del Artículo IV o exija –como contrapartida de onerosos préstamos- a los países que lo conforman la aplicación de políticas económicas de neto cuño neoliberal. Mediante el diseño de programas de ajuste y desregulación estatal de carácter genérico, estas medidas sugeridas o demandadas de forma obligada no suelen considerar demasiado los contextos sociohistóricos y políticos de los países donde buscan ponerse en marcha ni atender a las consecuencias sociales que pueden acarrear, a pesar de las incontables experiencias históricas de sus fracasos en diversos países del mundo para garantizar un crecimiento económico y un desarrollo sostenido en el tiempo. El caso de Túnez no es la excepción y, desde los acontecimientos de la denominada “Primavera Árabe”, ilustra cómo el crecimiento del peso de la deuda externa y sus intereses en el Producto Bruto Interno de un país puede ocasionar serias consecuencias macroeconómicas y un profundo malestar social a partir de ceñirse a las directivas del Fondo, en un contexto regional caracterizado por la concesión de préstamos también a países como Marruecos, Jordania, Yemen y Egipto.

Luego de un desembolso menor en 2012, el FMI aprobó un préstamo de 2900 millones de dólares para el país norafricano en 2016 con el objetivo de generar “confianza” a nivel internacional y “atraer” inversiones extranjeras, exigiendo cómo contrapartida una drástica reducción del déficit fiscal mediante el recorte del gasto público, una reducción del déficit comercial en aras de asegurar a futuro el pago de la deuda, una reducción de los subsidios a los alimentos y la energía, una apertura comercial cada vez mayor y reformas en el sistema impositivo que materialicen el ajuste y la desregulación estatal en áreas clave de la economía.

Las consecuencias macroeconómicas del programa del FMI no han sido menores, puesto que la moneda local –el dinar- acumula una depreciación de más del 90% en el último lustro y la inflación llegó al 7,5% durante 2019 –niveles no alcanzados desde 1991-, consolidando un creciente deterioro del salario real. Además, el crecimiento de la economía ha sido moderado, rondando el 2,5% durante 2018, el

¹Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Auxiliar docente en la Cátedra Brieger, Sociología de Medio Oriente de la UBA. Miembro-investigador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP.

²Profesor y Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Sociología Económica en IDAES – Universidad Nacional de San Martín. Auxiliar en la Cátedra Brieger, Sociología de Medio Oriente (UBA). Miembro-investigador del Departamento de Medio Oriente.

desempleo levemente en aumento supera el 15% desde 2014, el déficit de cuenta corriente es del 11% del producto y el peso de la deuda pública en el PBI es notablemente creciente desde 2009, superando actualmente el 70%, mientras que los pagos del servicio de la deuda alcanzaron durante 2018 el 22% del presupuesto del país, generando cada vez más descontento social³.

Durante 2018 y en enero de este año, se desataron masivas protestas sociales en las principales ciudades de Túnez en contra de las reformas estructurales y las políticas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional y llevadas adelante por el gobierno del presidente Beji Caid Essebsi, electo en 2014. Las mismas fueron acompañadas por dos huelgas generales –una este año y la otra el año pasado– que paralizaron aeropuertos, puertos, escuelas, hospitales, medios de comunicación estatales y oficinas del gobierno, en reclamo de aumentos salariales que pudieran paliar la caída en el poder adquisitivo de los tunecinos.

La ola de protestas de enero de 2018 se extendió durante cinco días seguidos, luego de que el gobierno anunciara a fines de 2017 recortes en el sector público –de la mano de grandes despidos de trabajadores–, la creación de impuestos para artículos tales como el alcohol, el sector automovilístico y actividades relacionadas a la hotelería, así como también una suba en el precio de los combustibles y el proyecto subir la edad jubilatoria. Tras los tensos y continuos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que dejaron como saldo el arresto de aproximadamente 800 personas, el gobierno anunció una serie de medidas compensatorias para paliar la situación económica y descomprimir los conflictos, entre las que figuró el incremento de la asistencia económica para las familias más pobres. La huelga general de noviembre del año pasado –la más grande desde el asesinato en 2013 del opositor Chokri Belaid, líder del [Movimiento Patriótico Democrático](#)– convocó a miles de trabajadores del sector público y el sector privado, en reclamo de aumentos salariales y contra las medidas de ajuste implementadas por el gobierno.

De forma similar, encabezadas como en 2018 por la Unión General Tunecina del Trabajo –UGTT–, las protestas y la huelga de enero de este año obligaron al gobierno a acordar un aumento en los salarios de los estatales, muy a su pesar y a contramano de las iniciales demandas del Fondo. La mencionada UGTT, es una poderosa confederación sindical con casi un millón de afiliados y que nuclea a los más de 800.000 empleados públicos, en un país con 11 millones de habitantes. Todo el proceso de negociación con la confederación sindical fue monitoreado por el organismo a los efectos de que el aumento salarial consignado tenga los menores efectos posibles sobre la meta de reducir el déficit fiscal, objetivo que a los ojos del Fondo no puede materializarse sin reducir el peso de los salarios de los empleados estatales –que representan cerca del 15% del PBI–, menos aún en un contexto de magro crecimiento económico⁴.

³ Para ampliar sobre este tema:

https://elpais.com/economia/2016/06/03/actualidad/1464962861_658193.html

<https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2017729750.html?idPais=TN>

https://www.eldiario.es/theguardian/FMI-asfixiado-Tunez-claro-protestando_0_731077258.html

⁴ Para expandir más el tema, pueden visitarse los siguientes sitios:

<https://www.efe.com/efe/espana/mundo/ugtt-paraliza-tunez-y-lanza-un-ordago-a-la-austeridad-del-gobierno-el-fmi/10001-3870191>

<https://www.laizquierdadiario.com/El-poderoso-sindicato-UGTT-paraliza-Tunez-contra-los-planes-del-Gobierno-y-el-FMI>

<http://www.industrialunion.org/es/sindicatos-de-tunez-en-huelga-por-las-politicas-de-austeridad-del-fmi>

https://www.eldiario.es/sociedad/UGTT-paralizar-Tunez-gobierno-FMI_0_858114853.html

Túnez y el Fondo, una relación con algo de historia

No es la primera vez que el país aplica políticas de liberalización económica ni tampoco que establece acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sino que la relación entre ambos se remonta –como en muchos otros casos en la región- a mediados de la década de 1980, cuando la caída en los precios internacionales del petróleo afectaba a los países productores, aun a los más modestos como Túnez. Luego de la implementación del primer plan de desarrollo a diez años (1962-1971) durante el gobierno de Habib Burguiba, el Estado había reforzado claramente su carácter interventor sobre la economía mediante un gran crecimiento de la inversión pública y del producto, fortaleciendo sectores como el turismo, la refinación de petróleo, los fosfatos y el acero, fomentando además en el agro una estructura organizativa cooperativista exitosa a partir del rol fundamental del sindicalista Ahmed Ben Salah como Ministro de Economía en el gobierno del partido Neo-Destur, entre 1961 y 1969⁵.

Cuando a principios de la década de 1970 el funcionario y su equipo fueron reemplazados por Hedi Noura, en ese momento Director del Banco Central de Túnez, la implementación del segundo plan de desarrollo decenal (1972-1981) se centró en la liberalización de la economía y el refuerzo de la iniciativa privada, desmantelando el sistema de cooperativas en la agricultura y fomentando la apertura comercial y financiera. Al finalizar el segundo plan, no solamente el crecimiento del PBI se había alejado de los niveles alcanzados en la década anterior, sino que además comenzaban a registrarse deterioros en la balanza de pagos y un déficit comercial creciente, agravados por la caída en los precios internacionales del crudo y el descenso en la actividad turística y agrícola que habían paulatinamente deteriorado las reservas de divisas del pequeño país magrebí. En ese contexto, el gobierno acudió a la ayuda financiera del FMI y el Banco Mundial a cambio de una reducción del peso del Estado en la economía, una reducción de la demanda agregada y de un paquete de medidas que materializaran un ajuste estructural: privatizaciones de empresas estatales en áreas clave –del sector textil, turístico, de la construcción, entre otras-, liberalización de las tasas de interés, depreciación de la moneda local, eliminación de subsidios, congelamiento de salarios y liberalización de las importaciones.

Las resistencias sociales y sindicales a las medidas antipopulares del gobierno de Burguiba se consumaron en históricos acontecimientos como el “jueves negro” de 1978 –que terminó con la muerte de más de 50 manifestantes a mano de las fuerzas del Estado- tras el llamamiento a una huelga general por parte de la UGTT, y las denominadas “revueltas del pan” de 1984 a partir del incremento en los precios de los alimentos producto de la eliminación de los subsidios, que culminaron con decenas de muertos y heridos como saldo de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, la Guardia Nacional y el Ejército.

Durante los primeros años del gobierno de Zine El Abidine Ben Ali, se llevó a cabo la firma de un acuerdo con el Banco Mundial para establecer una serie de objetivos a mediano plazo que el proceso de privatizaciones debía cumplir en aras de fortalecer cada vez más al sector privado en detrimento de las inversiones estatales, por ejemplo, en la industria, mientras se dieron incentivos a la inversión de empresas foráneas, como facilidades para exportar y girar utilidades a sus casa matrices y el goce de grandes exenciones tributarias⁶.

⁵Ayubi, Nazih (2000): “Liberalización económica y privatización: ¿se contrae el estado árabe?”, en Ayubi, N.: *Política y sociedad en oriente próximo: La hipertrofia del estado árabe*, Barcelona, Bellaterra.

⁶Rivlin, Paul (2009): “Arab Economies in the Twenty-First Century”, Cambridge University Press, Nueva York, Estados Unidos.

La dinámica política de los últimos años

Además de la ya de por sí difícil situación económica, Túnez debe hacerle frente a otros problemas que se agravaron durante el último lustro. Por un lado, desde el año 2015, las autoridades enfrentan la amenaza de distintos grupos armados que operan en su mayoría en la frontera con Argelia. Aunque esto parecería no estar ligado a los problemas económicos sí ha afectado a una de las principales actividades del país, en tanto Túnez ha sufrido distintos ataques terroristas en puntos turísticos, como el acontecido en la ciudad de Susa en junio de ese año, producto del cual resultaron muertos 39 turistas europeos. La “amenaza terrorista” provocó que los ingresos provenientes de esta actividad disminuyeran notablemente durante los últimos años, aunque esa tendencia parece haber empezado a revertirse en 2019⁷.

Por otro lado, el apoyo de la sociedad hacia el parlamento ha disminuido cada vez más, en un contexto en el que las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo se han vuelto también cada vez más tensas. Así, en septiembre de 2017, el parlamento tunecino aprobó la llamada “ley de reconciliación administrativa” mediante la cual concedió la amnistía a catorce funcionarios del gobierno de Ben Ali acusados de corrupción. Mientras que el presidente Essebsi aprobó dicha moción, miembros de la oposición y distintos sectores de la sociedad civil se manifestaron en su contra.

La cancelación de las elecciones municipales programadas para ese mes, las primeras desde la renuncia de Ben Ali en 2011, también fue una muestra de las tensiones políticas y el descontento social en el país magrebí, en tanto los comicios quedaron en suspenso tras la falta de acuerdo entre diversos líderes de los partidos políticos, representantes del presidente y el primer ministro. Además, para esa fecha se había inscripto una cantidad muy baja de votantes: de tres millones de personas habilitadas, solamente 500.000 estaban anotadas para ejercer el voto. Así, a pesar de su dilatación hasta marzo de 2018, la baja participación electoral de solamente el 34% en los comicios municipales no hizo más que confirmar la distancia cada vez más grande que existe entre vastos sectores de la sociedad civil y el gobierno.

Dichas elecciones marcaron el claro ascenso de las listas independientes, es decir, las no vinculadas formalmente a partidos políticos que, si se las considera de forma agregada aun a pesar de su gran heterogeneidad, obtuvieron más cantidad de cargos que el resto de las fuerzas. Por otro lado, los comicios consolidaron la victoria de Ennahda por sobre el partido del gobierno Nida Tunis en el marco de la tensa alianza gubernamental que ambas fuerzas establecieron desde 2014, cuando se dio inicio al proceso de descentralización política del país inaugurado con una nueva Constitución, pero que el presidente tunecino diera por terminada en octubre de 2018, cuando anunció la realización de elecciones legislativas y presidenciales para octubre y noviembre de 2019 respectivamente⁸.

Además, sumada a la situación económica, política y de seguridad por la que transita el ejecutivo, está aquella de los migrantes. Tras el hallazgo, en junio de 2018, de aproximadamente 100 personas muertas en las costas tunecinas, las cuales se presume intentaban llegar a las costas europeas cruzando el Mediterráneo, el gobierno anunció una serie de despidos de funcionarios de alto rango pertenecientes al área de seguridad. Aunque no sea totalmente responsable por la compleja situación humanitaria y migratoria por la que está pasando la región, el gobierno sí se había comprometido con la Unión Europea con tomar medidas para paliarla.

⁷ Visitar: <https://www.elmundo.es/internacional/2015/06/26/558d397eca47413f1a8b458f.html>

<https://www.radiotelevisionmarti.com/a/tunez-terrorismo-ataque-sobrevivientes/97621.html>

⁸ Sobre este tema:

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari77-2018-hernandodelarramendi-govantes-elecciones-municipales-tunez-mayo-2018

La muerte de Essebsi, las incógnitas políticas y las certezas económicas

El reciente fallecimiento del presidente tunecino a sus 92 años, el 26 de julio de 2019, plantea algunos interrogantes importantes relacionados con las disputas políticas en un año electoral, aunque no parecería implicar giros o cambios en lo concerniente a la política económica del país norafricano.

Como ya se mencionó, en septiembre de 2018 el presidente Essebsi, ex funcionario durante los gobiernos de Burguiba y Ben Ali, luego de romper la alianza política de su espacio político Nida Tunis con el partido islamista Ennahda, anunció la realización de elecciones legislativas y presidenciales para 2019. Sin embargo, en abril de este año, el mandatario comunicó que no participaría de tales comicios y pidió a su partido apoyar al primer ministro Youssef Chahed –uno de los artífices de varias de las medias económicas de ajuste–, quien tiempo atrás se había apartado del espacio por un enfrentamiento con el hijo del presidente y secretario general del partido, Hafedh Caid Essebsi.

En junio de este año, y como consecuencia de los resultados de los comicios de 2018, el parlamento de Túnez aprobó cambios en la ley electoral en pos de limitar la presentación a elecciones de candidatos independientes. Esto ocurrió luego de que el mayor magnate de la comunicación tunecino y empresario de la publicidad, Nabil Karoui, anunciara sus intenciones de presentarse en las presidenciales de noviembre. Además de ser uno de los fundadores del Nida Tunis y ex miembro de su comité central, es el propietario de la cadena de televisión más vista del país –Nessma TV–, y algunos sondeos ya lo ubican como el candidato con mayor intención de voto. Es en esa clave que pueden comprenderse las enmiendas a la ley electoral que prohíben la postulación de personas que hayan realizado publicidad política durante el año anterior a los comicios o de quienes lleven adelante y se beneficien de ONGs caritativas, puesto que Karoui cumple con ambas condiciones como empresario de la comunicación y fundador de la asociación civil Khalil Tounes Foundation⁹.

El fallecimiento del mandatario tunecino trae a discusión las implicancias de tales enmiendas, puesto que nunca ratificó los cambios en la ley electoral promulgados por el poder legislativo. Según la nueva Constitución de 2014, la presidencia deberá ser ejercida de forma interina por el presidente del parlamento Mohamed Ennaceur, de 85 años, por un máximo de 90 días. La incógnita radica entonces en cuál ley electoral regirá los próximos comicios, si la vieja ley o la nueva con las modificaciones no ratificadas por Essebsi, en un contexto en el que ya se adelantaron las elecciones presidenciales al 15 de septiembre previstas, antes de la muerte del mandatario, para el mes de noviembre de este año¹⁰.

Sin embargo, su fallecimiento no parecería hacer peligrar la orientación macroeconómica del país, no solamente porque éste depende en gran medida del financiamiento y de las buenas relaciones con el Fondo para poder sobrellevar su déficit fiscal y sus desequilibrios externos, sino porque ninguno de sus posibles sucesores aparenta tener una visión del rol del Estado en la economía muy diferente a la suya y la de su partido: ni Youssef Chahed ni Nabil Karoui se han perfilado disconformes con la implementación de las reformas y medidas de cuño neoliberal, sino todo lo contrario.

Así, los interrogantes que surgen son acerca de la plausibilidad y continuidad de las políticas de ajuste del Fondo Monetario debido al creciente peso de la deuda en el PBI y sus intereses en el presupuesto del país más pequeño del Magreb, en un contexto de protestas sociales con cada vez más adhesión. Si

⁹ Por ejemplo, sobre este tema, visitar: https://elpais.com/internacional/2019/05/31/actualidad/1559313106_850487.html
<http://www.opemam.org/node/11134>

¹⁰ Acerca de eso, visitar: https://elpais.com/internacional/2019/07/25/actualidad/1564050860_231294.html
<https://www.lavanguardia.com/internacional/20190725/463694883797/muere-presidente-tunez-beji-caid.html>
<https://www.efe.com/efe/espana/mundo/tunez-adelanta-las-elecciones-al-15-de-septiembre-tras-muerte-del-presidente/10001-4030734>

bien los préstamos a Túnez solamente explican el 2% de la totalidad de la deuda de todos los países del mundo con el organismo, las reformas estructurales y las medidas de ajuste han suscitado un malestar y un descontento social prolongado y cada vez más creciente que han limitado el avance de ciertas políticas económicas.

En este sentido, el caso de Túnez ilustra cómo las complejas relaciones entre los países deudores y los organismos multilaterales de crédito no son siempre relaciones directas de imposición, sino vínculos en donde las dos partes tienen intereses propios –no siempre del todo coincidentes– que condicionan su accionar pero sin determinarlo de forma lineal, en tanto poseen, como sostiene Pablo Nemiña¹¹, una relativa autonomía para tomar decisiones.

Es por ello que resulta central, a la hora de seguir el derrotero económico y político de este pequeño país norafricano en su aparentemente convulsionado futuro inmediato, atender a la forma en que se desarrollan las luchas y resistencias sociales frente al ajuste y las políticas neoliberales, en tanto podrían condicionar su implementación. No parece vislumbrarse en el mediano plazo una merma en el descontento y la movilización de los trabajadores y la sociedad civil tunecina frente a políticas económicas de austeridad cuyas consecuencias tan bien conocemos los países del Sur.

¹¹Nemiña, Pablo (2019): “La relación entre el FMI y los gobiernos tomadores de crédito. El aporte de la EPI centrado en la incidencia de los intereses”, Revista Desafíos, Universidad del Rosario, Bogotá, vol. 31 p. 341–341. Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/6140/6859>